

Ante un futuro incierto: estudios eficaces, ciudadanía activa y empresas responsables

José A. Hernández del Toro *

Hay quienes afirman que la actual crisis económica y social deriva de los vicios de un «Capitalismo de Casino», del «comportamiento autista» de las grandes empresas y de las malas artes de «la nueva casta» de los altos directivos, quienes espoleados por retribuciones exorbitantes ligadas al corto plazo y a la especulación han hecho añicos nuestro modo de estar y vivir. Ante un futuro incierto tendrán que ser aunadamente los estados, la ciudadanía activa, las ONGs y las empresas, nuevamente, responsables, quienes sobre nuevas bases sociales y políticas nos saquen adelante. Todo depende de nosotros.

Un mundo en cambio

Es casi un tópico subrayar la velocidad, magnitud e imprevisibilidad con la que en los últimos años se están produciendo cambios en el mundo. Tantos y tan profundos, que se hace más cierta que nunca la reflexión que indica que «más que una época de cambios estamos asistiendo a un cambio de época».

El desarrollo de la globalización económica y financiera no parece tener ya límites. Gracias a ella se ha disparado el crecimiento de la

* Doctor en Economía. Ha trabajado dieciocho años en Intermón Oxfam y en la actualidad lo hace en el Gabinete del Ministro de la Presidencia.

riqueza global. El PIB mundial se ha multiplicado por seis en treinta años, pasando de casi 11 billones de dólares en 1980 a más de 60 billones en la actualidad.

Parte de este crecimiento descansa sobre el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que están reconfigurándolo casi todo. La prensa escrita debate si dejará de editarse en papel en pocos años. Gigantes empresariales, como Kodak, se derrumban mientras que fenómenos como Facebook, en menos de media década, han sumado más de 500 millones de usuarios y un valor bursátil que podría alcanzar los 65.000 millones de dólares.

Y por supuesto cambia nuestra vida cotidiana en hábitos, costumbres y posibilidades de comunicación. Un niño de Irlanda puede dar clases de matemáticas con un profesor de la India por Skype, un médico de Tanzania puede consultar los últimos artículos científicos en la web, los jóvenes pueden convocar manifestaciones, como las que están en el origen y extensión de las revueltas de la llamada «primavera árabe» o el movimiento 15-M.

En este nuevo contexto, las locomotoras del crecimiento y la innovación están cambiando. Incluso

las categorías estancas que contraponían a los países ricos del G-7 con los emergentes del llamado grupo de los BRIC, están saltando por los aires.

Las economías más dinámicas y motores del crecimiento global son países emergentes. China, India, Brasil, Corea del Sur, Indonesia, Rusia, México, Turquía, Egipto y Taiwán aportarán durante la próxima década al crecimiento mundial más que la media de los países más desarrollados. Pero incluso hay otras once economías (como Nigeria, Tailandia, Bangladesh, Perú o Malasia) que contribuirán durante la próxima década al crecimiento mundial más que Italia, el menor de los países del G-7. Al ritmo actual, en 2050 no habría ningún país europeo en el G-8 de las mayores economías del planeta.

El mundo se vuelca fundamentalmente hacia Asia, el crecimiento de la economía mundial ya no depende de Europa, Japón o EE.UU. Ni siquiera la innovación tecnológica es ya patrimonio de las potencias occidentales. En el último informe PISA, en los primeros puestos están Shangai, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur.

Pero el cambio es también ideológico y de valores. En los años 80 se produjo una profunda revisión de

la economía de mercado y del estado de bienestar, que convirtió en políticas públicas la doctrina económica de la Escuela de Chicago: liberalización, desregulación, adelgazamiento del Estado (privatizaciones) y políticas monetarias y fiscales restrictivas.

Las políticas neoliberales se convirtieron en la ortodoxia económica a la vez que se produjo un vuelco en los valores sociales. Vivimos un proceso de individualización de los valores, de ensalzamiento del éxito individual, concentrado en la acumulación rápida de dinero, y desvalorización del compromiso colectivo por el bien común.

Como señala Tony Judt, «todavía en los años 70 la idea de que el sentido de la vida era enriquecerse y que los gobiernos existían para facilitararlo hubiera sido ridiculizado no sólo por los críticos tradicionales del capitalismo, sino también por muchos de sus defensores más firmes».

La complejidad y vertiginosidad de los cambios están haciendo crecer en la ciudadanía un sentimiento de incertidumbre, una lucha por comprender el mundo y el lugar que cada uno ocupamos en él.

Para muchas personas que sienten que les han cambiado las reglas a mitad del partido se les hace más

válida que nunca la famosa expresión: «Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas».

El mundo en cambio es, además, un mundo en crisis. En triple crisis:

- Ambiental, con el cambio climático, la presión sobre recursos básicos como el agua y la tierra, la contaminación química o la polución de las grandes ciudades, donde vive más de la mitad de la población mundial. En Europa, este porcentaje se eleva al 80%.
- Social, con más de 212 millones de personas sin empleo en el mundo, con una de cada seis personas del planeta que padece hambre cada día o con la inequidad en aumento: por cada país en el que el que se han reducido las desigualdades, han aumentado en otros dos.
- Económica, con la crisis financiera y económica más grave de los últimos ochenta años que ha puesto de manifiesto la falta de solvencia de un modelo de economía fundamentalmente financiera basado en la desregulación y la ausencia de supervisión eficaz del mercado. El volumen de las transacciones financieras en el mundo es hoy de 1.000 billones de dólares al año (4 billones diarios). Más de 17 veces el volumen de la economía real.

Llegamos al dinero: la «fe» en la maximización de los beneficios (financieros y a corto plazo)

Milton Friedman, en su dogmática interpretación del concepto de la «mano invisible» de Adam Smith, proponía que el bien social sería consecuencia automática de los beneficios económicos de las empresas, rechazando así que el objetivo de las empresas tuviera que ser otro que la maximización de estos beneficios.

Sobre la crisis está dicho casi todo, aunque haya sido hace bien poco cuando se puso de manifiesto que el propio FMI estuvo alentando hasta 2007 el uso de los instrumentos financieros innovadores y las prácticas imprudentes, sin hacer caso a las voces que desde dentro (como la del economista jefe, Raghuram Rajan) se atrevieron a llamar la atención sobre los desequilibrios que se estaban creando, y que a la postre provocaron la peor crisis financiera de los últimos ochenta años.

Pero la crisis no ha sido sólo una cuestión de falta de regulación, de inadecuadas políticas públicas o de una insuficiente supervisión por parte de los poderes públicos.

La crisis se puede entender también como una consecuencia de un «comportamiento autista» de

algunas empresas y de una especie de «nueva casta» de altos directivos que, espoleados por retribuciones exorbitantes ligadas a los resultados a corto plazo, han impulsado los aspectos más especulativos y menos sostenibles de la economía.

Y no solo sostenibilidad social o ambiental. Como se ha puesto de manifiesto, ni siquiera parecieran estar actuando para proteger el interés de los accionistas de sus empresas en el largo plazo.

La crisis está suponiendo de manera especial una importante presión sobre los países occidentales, con la debacle del sistema financiero contaminado por los productos tóxicos, la aguda recesión de 2009, el estallido de las burbujas inmobiliarias (Gran Bretaña, Irlanda, EE.UU. o España), el impacto del desempleo (especialmente grave en nuestro país, pero inusitadamente alto en un país casi sin coberturas sociales como EE.UU.) y la presión sobre la deuda soberana y sobre el euro.

La crisis financiera y económica parecía que iba a cuestionar las bases del neoliberalismo que incentivaron las burbujas especulativas. Hace dos años parecía que el G-20 iba a iniciar lo que Sarkozy definió como la refundación del capitalismo. Pero la realidad es

que una vez que la calma ha vuelto a la economía mundial, las políticas emprendidas más que cambiar el rumbo, parece consolidar un modelo de economía basado en la desregulación y la no intervención pública.

Paradójicamente, las opciones políticas que promovieron las políticas del llamado «Capitalismo de Casino» se están viendo más respaldadas que las opciones que buscan introducir reformas que eviten nuevas crisis. Y lo que parece que hace falta es construir un futuro nuevo, no volver al pasado.

Las reformas que buscan nuevos mecanismos tributarios globales (como la Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales o los impuestos a las emisiones de CO₂), o la reforma de los mercados financieros (con la restricción y hasta prohibición de los instrumentos financieros más especulativos) o la erradicación de los paraísos fiscales, o las reformas fiscales para evitar la ingeniería tributaria y las prácticas de elusión fiscal... Todas estas reformas se encuentran con fuertes resistencias una vez que lo peor de la crisis ha pasado.

Hace falta corresponsabilidad

Toda esta larga introducción tiene sentido para llamar la atención so-

bre dos cuestiones capitales a la hora de reflexionar sobre la función social de la riqueza:

- Que estamos viviendo un momento histórico. Por el calado de los cambios globales, por la profundidad de la crisis y por su terrible impacto en las personas mediante el desempleo y la pobreza.
- Que es imprescindible que todos los agentes sociales, políticos y económicos nos hagamos corresponsables. Pero no para sacarle las castañas del fuego a nadie, sino para colocarnos, como país y como sociedad, en la vanguardia del conocimiento, de la generación de riqueza y de la solidaridad. Y para hacerlo sin copiar al pasado, sino inventando el futuro.

La construcción de una sociedad próspera, inclusiva, competitiva y solidaria exige la combinación de Estados eficaces, una ciudadanía activa y empresas responsables.

La responsabilidad del Estado

El papel del Estado no puede relegarse a una completa subordinación del mercado, poniendo cuantas menos reglas mejor y confiando en la autorregulación de la economía. Como se ha señalado,

esta interpretación dogmática del liberalismo está, en buena medida, detrás de los desequilibrios que han provocado la crisis.

El Estado, que somos la sociedad organizada, debe desarrollar reglas que:

- Protejan a los más débiles.
- Alienten los comportamientos responsables.
- Faciliten la participación de la sociedad en la definición de las políticas.

El Estado, además, debe asegurar el cumplimiento de las normas. No puede hacerse dejación de la tarea de supervisión, porque detrás de eso vienen las crisis (desde Enron a Lehman Brothers).

Pero creo que, además, el Estado debe impulsar las reformas del modelo económico que demandan los cambios que se están produciendo en el mundo y la gravedad de la crisis. Reformas que deben ser profundas, y en las que hay que actuar con inteligencia para distinguir qué hay que mantener y qué debe cambiarse.

Ante la responsabilidad de promover cambios de futuro en un contexto de tanta incertidumbre, creo que la máxima ignaciana de «no hacer mudanza en tiempo de turbación» debería adaptarse a no

hacer los cambios desde la turbación, pero en modo alguno renunciar a los cambios. Porque los cambios forman parte de la esencia misma de esta era.

Las palabras de Arrupe en los convulsos años que le tocó dirigir la Compañía de Jesús resultan muy inspiradoras: «No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Temo más bien que tengamos poco o nada que ofrecer a este mundo, poco que decir o hacer. Me espanta que podamos dar respuesta de ayer a los problemas de mañana y más que nada temo esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos».

En el caso de España, la crisis financiera global irrumpió cuando no se había desinflado controladamente una burbuja inmobiliaria de grandes proporciones.

Una burbuja que había generado mucho empleo durante quince años, pero de poca cualificación, llegando a desincentivar la formación del capital humano. Solo el desplome de este sector ha provocado 1,7 millones de empleos perdidos. Una burbuja que multiplicó la deuda externa impulsada por la deuda privada y de las empresas, que llegó a ser el 226% del PIB. Una burbuja que multiplicó los ingresos fiscales extraordinarios, desincentivando una estructura

tributaria más justa y sostenible. Con el desplome del sector, la caída de ingresos fiscales ha contribuido intensamente al aumento del déficit.

La contundencia de los datos no dejan otra alternativa que promover un cambio de modelo de desarrollo, porque éste se ha manifestado dramáticamente como insostenible.

Las reformas deben apuntar a cinco objetivos básicos:

- Acelerar la recuperación económica.
- Sentar las bases de un modelo económico más sostenible y equilibrado.
- Crear empleo.
- Preparar a la sociedad y a la economía para ser competitiva e inclusiva.
- Apuntalar los fundamentos del Estado de bienestar manteniendo la cohesión social.

Algunas ya están en marcha. Como la profunda transformación del sector financiero, en el que hemos pasado de 40 cajas de ahorro a 17, transformando el marco legal para asegurar profesionalidad y la máxima solvencia. Un cambio no exento de dudas, especialmente por el futuro de la obra social de

las cajas y por la tarea que éstas han realizado de inclusión financiera de los segmentos más excluidos del sistema económico.

Otra reforma de gran calado ha sido la del sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para los próximos treinta años. Esta reforma no es sólo importante para futuros pensionistas y para los trabajadores que en el futuro sostendrán con sus aportaciones el sistema (cuando el incremento de la esperanza de vida y la reducción de población laboral cotizante sean una realidad). También lo es para la solvencia del país, que determina el coste de los préstamos que pidamos hoy. Y tiene esta importancia porque ha sido la única reforma que en Europa se ha pactado con sindicatos y empresarios.

La reforma laboral que es imprescindible para dinamizar el empleo. Baste un dato: ante los cambios radicales que se dan en el mundo del trabajo y en su organización a nivel mundial, el marco de negociación colectiva que hay en España no ha cambiado en treinta años. La nueva realidad exige nuevas maneras de defender el derecho a un trabajo digno y a un desarrollo profesional. El énfasis en la formación y la polyvalencia de los trabajadores y la

transparencia de las empresas para fomentar nuevas maneras de participación en los beneficios (y de compartir los sacrificios más justa) son elementos del camino a seguir en este campo.

Competitividad de la industria. La I+D+i es un pilar básico del desarrollo del sector que se está demostrando más dinámico en la recuperación de la economía y donde el empleo es más estable. Los planes gubernamentales de aumento de la base industrial cuentan con la base de un tejido empresarial muy sólido, pero que debe apostar por la innovación y la internacionalización. En el País Vasco, donde la industria tiene un peso muy importante, la tasa de paro es la mitad que en el resto de España. Por el contrario, en Valencia y Murcia casi se ha triplicado.

Energía. La economía española es una de las menos eficientes de Europa. Cada punto del PIB que producimos lo hacemos con un gasto energético más alto que otros países de nuestro entorno. Y esto es insostenible económica y ambientalmente. Las reformas (como la Ley de eficiencia energética y renovables) deben impulsar decisivamente la transición del modelo energético hacia uno mucho más eficiente y sostenible, basado en la generación renovable.

Cualquier cambio en el país pasa por la educación. La reforma de la Formación Profesional y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) tienen que reducir a la mitad el abandono escolar en 2020, ofreciendo a los jóvenes instrumentos para su inserción laboral. Un desafío que la sociedad española no puede permitirse no alcanzar.

En definitiva, el papel de las Administraciones Públicas en una coyuntura que sin ampulosidad se puede considerar histórica es mucho más relevante que la mera gestión eficaz de unos servicios y recursos. Debe ser la de promover e incentivar una profunda transformación.

Y una transformación de este calado no se puede publicar en el *BOE*. Necesita del concierto de las fuerzas políticas, sociales y económicas. Algo que en el crispado ambiente político de los últimos años está habitualmente subordinado lamentablemente a las estrategias electorales.

La responsabilidad de la Sociedad civil y las ONGs

El surgimiento del neoliberalismo y la retirada del Estado que trae aparejada su aplicación práctica, ha propiciado una repotenciación

del concepto de sociedad civil, como esfera a la que el Estado debe rendir cuentas del ejercicio de sus limitadas competencias y como promotora del desarrollo a través de la iniciativa privada. El ejemplo más reciente es el de la «Gran Sociedad» que propone el Primer Ministro Británico, David Cameron.

Simultáneamente, y desde una posición ideológica antagónica, la sociedad civil también se ve revaluada. Como fruto del mismo proceso globalizador que vive la humanidad y apoyados en las nuevas herramientas de la comunicación, aparecen los «movimientos por la justicia global». Son redes de movimientos sociales, uniones de sindicatos, redes de consumo responsable, redes de centros de investigación y acción y redes de ONGs. Estos grupos se caracterizan por su interconexión e interdependencia; asumen la complejidad del mundo, de sus relaciones y de las propuestas que han de hacer; y plantean que en el camino, en la experimentación, se encuentra parte de la solución.

Su aparición, inicialmente con protestas como las vividas con ocasión de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle (EE.UU.) en 1999, y posteriormente organizando espacios de encuentro y debate, como el Foro Social Mundial que se celebra desde 2001,

constituyen los espacios de expresión de lo que Díaz-Salazar llama una «sociedad civil internacionalista», y cuya más reciente manifestación han sido las movilizaciones del 15-M en España.

En este contexto en el que desde opciones ideológicas opuestas (neoliberal y alterglobalizadora) se da una exaltación del concepto de sociedad civil, aunque con ello se busquen fines distintos, propongo centrar la mirada en la contribución a la transformación social desde la corresponsabilidad de las Organizaciones No Gubernamentales, en tanto que manifestación organizada de la sociedad civil.

Para hacerlo, propongo una mirada sobre sus fortalezas y debilidades.

Así, algunas de las fortalezas vinculadas a los valores que les dan origen y a sus capacidades de actuación serían:

- La neutralidad e independencia, especialmente necesarias para atender a víctimas de conflictos bélicos.
- Las ONGs son más integradoras, promoviendo mejor que los programas públicos la participación de los beneficiarios en todas las etapas. Esto permite que la identificación de sus necesida-

des y la incorporación de sus demandas y expectativas sea más inmediata, posibilitando la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo, asumiendo como propios los proyectos y fortaleciendo la democracia a través del refuerzo de la sociedad civil.

- Mayor probidad. Las ONGs en general son percibidas como organizaciones movidas por principios elevados, y su actuación es valorada como recta y honesta, por la mayoría de la población.
- Capacidad para catalizar la solidaridad, mediante la movilización de fondos privados y el voluntariado, siendo en muchos casos el eje fundamental de movilización ciudadana en momentos de implicación social baja, dando un sentido ético a la ciudadanía.
- La eficacia, posible en buena medida por un mejor conocimiento de la realidad local, fruto de la presencia sobre el terreno y los lazos con organizaciones locales y una menor escala de funcionamiento, que facilita el uso de métodos participativos más adecuados.
- Las ONGs trabajan con costes más bajos que los gobiernos, debido en gran medida al menor

tamaño de sus operaciones y al compromiso y entrega con la que trabaja su personal, que se nota, por ejemplo, en unos salarios más bajos.

Sin embargo, más que en la satisfacción que el reconocimiento de las fortalezas puede legítimamente reportar, es en la identificación crítica de las debilidades y en la conciencia de las amenazas, desde donde puede mejorarse la contribución a la construcción efectiva de una sociedad más inclusiva. Así, algunas de las debilidades que derivan de su misma naturaleza no gubernamental son:

- La actuación es con frecuencia atomizada y dispersa, con lo que si bien pueden beneficiar a personas concretas, la capacidad de generar cambios en los desequilibrios sociales es mínima. Por otra parte, esta dispersión les priva de los efectos de economías de escalas de grandes programas sociales, lo que puede compensar hasta anular la mayor eficacia y los menores costes que suelen tener las ONGs.
- Dada la reducida escala de los proyectos, el trabajo de las ONGs difícilmente tiene impacto en los indicadores agregados que miden la pobreza y el desarrollo. Son las políticas públicas,

los vastos programas sociales de vacunación, alfabetización o saneamiento, los que inciden de manera significativa en estos indicadores y, por ende, en el bienestar real de la sociedad en su conjunto.

- Las ONGs de gran tamaño que manejan grandes presupuestos corren los mismos peligros de burocratización y falta de agilidad que las agencias públicas.
- Igualmente corren el riesgo de instrumentalización por parte de los poderes públicos, pudiendo incluso llegar a aliviar la presión social –tanto de las personas empobrecidas como de la opinión pública– sobre los gobiernos para que asuman actuaciones que les corresponden: desde intervenir en detener una catástrofe, hasta asumir la titularidad y responsabilidad pública de prestar servicios sociales. En este sentido, la asunción de tareas y responsabilidades que les corresponden a los Estados por parte de ONGs es una práctica especialmente discutida.
- La recaudación de fondos privados puede llevar a las ONGs a depender en exceso de la volátil atención de los medios de comunicación, generalmente atenta a catástrofes, condicionando las prioridades secto-

riales y geográficas. Además, esta dependencia junto a algunas estrategias de captación que acentúan los sentimientos de culpabilidad del donante y la imagen de dependencia del beneficiario, refuerzan una imagen distorsionada de la situación de las poblaciones de los países empobrecidos.

- Las ONGs no son inmunes a los problemas de transparencia interna y funcionalidad deficiente de cualquier organización humana. Más aún, debido al importante componente ideológico, a los valores que tienen una fuerte presencia en muchas ONGs y al peso del compromiso y las experiencias personales que se dan en muchas de las personas que ejercen roles directivos, no son infrecuentes los estilos de dirección muy personalistas y las rigideces institucionales.
- Por último, la dependencia de los proveedores de fondos, tanto privados como públicos, de los intereses y percepciones de los directivos y de los propios equipos de las ONGs pueden acabar pesando en la definición de políticas y estrategias de actuación más de lo que cuente la opinión y percepciones de los beneficiarios de las acciones de la propia ONG.

La responsabilidad de la empresa

En la actualidad difícilmente puede discutirse que la empresa es el corazón de la economía de mercado. La pieza clave para regular oferta y demanda de bienes y servicios a la sociedad y la principal protagonista de la innovación, la creación de riqueza y de empleo.

Hoy las empresas son mucho más fuertes que lo han sido en la historia. No sólo por la mayor debilidad de sus contrapesos habituales (el Estado y los Sindicatos), sino por la enorme concentración que se está dando: el 50 de las 100 economías más grandes del planeta son empresas. Además, las empresas tienen una capacidad como nunca la han tenido para generar impactos en la sociedad. Impactos socio-laborales (por ejemplo, si deciden poner o quitar una fábrica de un país) e impactos ambientales.

Pero paradójicamente, las empresas están cada vez más penetradas por la sociedad, lo que las hace más vulnerables que lo han sido nunca. Dependen de la opinión de inversores, de líderes sociales o ambientales, de lo que se dice de ellas en las redes sociales...

Que le pregunten a British Petroleum, la segunda petrolera del mundo, que tras el vertido del Gol-

fo de México llegó a perder en la Bolsa de Londres la mitad de su valor de capitalización, y que de los beneficios de 16.578 millones de dólares de 2009 pasó en 2010 a tener las mayores pérdidas en veinte años (3.719 millones de dólares).

Las empresas no tienen otra opción que asumir su parte de corresponsabilidad. Pero ser responsable para la empresa supone mucho más que la filantropía de qué hacer con parte de los beneficios. La pregunta no es qué hacer con los beneficios, sino cómo se generan los beneficios.

Supone, también, no hacer un uso instrumental de la ética, según la cual, se da prioridad a la creación de valor económico para los accionistas, aunque teniendo en cuenta las restricciones que supone atender y satisfacer de manera «razonable» las expectativas de algunos grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, medio ambiente, la sociedad en general...

La concepción avanzada y moderna de la Responsabilidad Social de la Empresa debe considerar a la empresa en la sociedad y no frente a ella. Debe considerar que los intereses de todos los «grupos de interés» son legítimos, que tienen un valor intrínseco, y que tiene que establecer canales efectivos para desarrollar un diálogo since-

ro, que comience por escuchar, continúe por el diálogo en los dos sentidos y alcance la participación efectiva de los grupos de interés en las decisiones estratégicas de la empresa.

Comentario final

¿Podemos tener esperanza en un futuro mejor para nuestro país y para el mundo?

Pues depende de nosotros. Depende de que gestionemos con responsabilidad nuestros respectivos ámbitos de acción: como ciudadanos, como consumidores, como contribuyentes, como votantes, como emprendedores, como responsables en las administraciones públicas...

Podemos volver los ojos a Japón. Como país fueron capaces de salir

de las ruinas de la II Guerra Mundial para convertirse en la segunda potencia económica del mundo, y ante los desastres de la naturaleza, terremoto y Tsunami de marzo de 2011, han mostrado unas dosis de civismo impresionantes. Buena parte de esa capacidad de recuperación se atesora en una forma de ser como pueblo, que no estará exenta de defectos, pero que en los trances más difíciles asume su responsabilidad.

Bien, pues no miremos ahora tan lejos. Veamos también nuestra propia historia, y todo lo que ha evolucionado y cambiado nuestro país en los últimos treinta y cinco años. ¡Cuánto nos hemos transformado como país!

A veces se nos olvida todo el potencial que tenemos. Creo que es hora de que lo pongamos a trabajar. ■